

Santiago, diez de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento sumario de constitución de servidumbre de tránsito tramitado ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas bajo el Rol C-3266-2019, caratulado “Huentén con Uribe”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés, que revocó el fallo de primer grado de seis de junio de dos mil veintidós, que rechazó la demanda y, en su lugar, la acogió.

Segundo: Que el recurrente en su recurso de nulidad sustancial acusa, en primer término, que el fallo infringe el artículo 848 del Código Civil en relación con el artículo 1698 del mismo cuerpo legal, al acoger la acción no obstante no haberse acreditado debidamente la falta de toda comunicación de los predios dominantes, con el servicio para su uso y beneficio. Agrega, por otro lado, que el importe de la indemnización a pagar, simplemente en el proceso no existe, pues no se acogió como elemento de prueba, o no fue acompañado en tiempo y forma, siendo de carga de la parte demandante acreditar tales presupuestos, lo que no hizo en autos.

En segundo término, el impugnante alega infracción a los artículos 160 y 170 N° 4 y N° 6 del Código de Procedimiento Civil, ya que la sentencia materia de casación no fue pronunciada conforme al mérito del proceso, no existe un pronunciamiento claro en torno a la carencia de la prueba, para acreditar la procedencia o no de la constitución de servidumbre de tránsito, ni a la ponderación de los hechos y si tenían éstos o no fundamento legal.

Por último, señala que los sentenciadores vulneraron las leyes reguladoras de la prueba, en especial, los artículos 34 (sic) y 342 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la prueba testimonial y confesional rendida por los demandantes no resultaba relevante frente a la documental.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se invalide la sentencia, resolviendo lo que en derecho corresponda en base que existirían evidentes infracciones a la Constitución Política de la República y a las normas civiles



invocadas, y omisión o incorrecta aplicación que ha influido en lo dispositivo del fallo, con costas.

Tercero: Que el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, en armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del citado cuerpo legal, exige, como sustento de la invalidación de la sentencia impugnada, el quebrantamiento de una o más normas legales contenidas en la decisión. Por ello, es menester que al interponer un recurso con tal objeto su promotor deba cumplir necesariamente con lo exigido por el precepto en análisis, esto es, expresar en qué consisten él o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida.

Además, del cumplimiento del requisito enunciado en el párrafo precedente, con idéntica rigurosidad el mismo artículo 772 aludido impone -a quien interponga un recurso de casación en el fondo- la obligación de señalar, de manera circunstanciada, en el respectivo escrito, el modo en que él o los errores de derecho que denuncia han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que trata de invalidar. Por ende, la exigencia señalada no se agota con la simple indicación de las normas conculcadas, sino que requiere además un desarrollo argumentativo en torno a los yerros de derecho que acusa.

Cuarto: Que al enfrentar lo expuesto precedentemente con el recurso de casación en el fondo en estudio, se concluye indefectiblemente que carece de los requerimientos legales exigibles para su interposición. En efecto, el libelo únicamente menciona algunos preceptos legales sin explicar cómo se habría producido su contravención, ni mucho menos cómo aquello causa perjuicio a su parte, incluso alegando vicios formales improcedentes en este arbitrio de nulidad sustancial.

Cabe hacer presente además, que el recurrente omite denunciar la infracción legal a los artículos 839, 841 y 847 del Código Civil, teniendo en consideración que fue precisamente esta normativa la que sirvió de sustento jurídico a la demanda intentada y luego fue aplicada por los sentenciadores para resolver el litigio.



Por último, de una simple lectura del arbitrio de nulidad se constata que éste no contiene una petición clara, en torno a la decisión que debiese adoptar esta Corte de dictar una posible sentencia de reemplazo, careciendo entonces de peticiones concretas el recurso.

Quinto: Que, en consecuencia, las falencias anotadas precedentemente impiden que el arbitrio pueda superar el umbral de admisibilidad formal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisible** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Sergio Soto Hergutt, en representación de la demandada, contra la sentencia de cuatro de abril de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Regístrese y devuélvase, vía interconexión.

Nº 68.539-2023.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Soledad Melo L., Ministra Suplente Dobra Francisca Lusic N. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, diez de agosto de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diez de agosto de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

